TERCERO.- De acuerdo al Reporte Interno la misma habría vulnerado los artículos 10, 22 y 25 de la Ley de Comunicación, en concordancia con el artículo 18.1 de la Constitución, que establece el derecho de toda persona a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

Las normas de la Ley de Comunicación supuestamente vulneradas, se refieren a las normas deontológicas (artículo 10) concernientes al ejercicio profesional, específicamente el abstenerse a omitir y tergiversar intencionalmente la información u opinión, y el de respetar los derechos de autor y las normas de las citas; así como se señala el derecho de los ciudadanos de recibir información de relevancia pública veraz (artículo 22) y la abstención de tomar posición institucional sobre inocencia o culpabilidad de las personas involucradas en una investigación penal (artículo 25).

CUARTO.- Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) el orden público y la democracia no pueden ser concebidas sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse¹, por esta razón, no puede concebirse al periodismo como la mera prestación de un servicio público, pues la dimensión individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión se halla imbricada con el ejercicio de esta profesión.

La Corte IDH, así como la Corte Europea de Derechos Humanos han establecido el criterio que la libertad de expresión es válida no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente

¹ CorteIDH; *La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, OPINIÓN CONSULTIVA OC-5/85 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985; párr 60